

Jojutla, Morelos; a diez de marzo de dos mil veintiuno.

V I S T O S para resolver los autos del Toca Civil número **133/2020-5**, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por **la parte actora ******* en contra de la **sentencia definitiva** de fecha **veinticuatro de noviembre de dos mil veinte**; dictada por la **Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos**, en el juicio **Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva** promovido por ********* contra *********, *********, *******y ******* **así como *******; en el expediente número **354/2019**; y,

R E S U L T A N D O S:

1. Con fecha **veinticuatro de noviembre de dos mil veinte**, la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, dictó la sentencia definitiva materia de la apelación, qué en su parte resolutive, a la letra dice:

***“PRIMERO.** Este Juzgado es competente para conocer y fallar el presente asunto.*

SEGUNDO. La parte actora ***** no acreditó la procedencia de su acción; los demandados *****, *****
 *****Y *****, no opusieron defensas y excepciones y el demandado ***** acreditó la excepción de falta de acción opuesta, en consecuencia

TERCERO. Se ABSUELVE a los demandados *****, *****, *****
 ***** Y *****de las prestaciones que les fueron reclamadas.

CUARTO. Se absuelve a la parte actora ***** del pago de gastos y costas procesales originadas por la tramitación del presente juicio.

QUINTO. **NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...**

2. Inconforme con la resolución anterior, ***** en su carácter de parte actora, hizo valer el recurso de apelación, el cual, substanciado legalmente ahora se resuelve, al tenor siguiente:

CONSIDERANDOS:

I. Competencia.- Esta Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es competente para conocer el presente asunto en términos de lo dispuesto por el artículo 99 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Morelos, en relación con los artículos 2, 3 fracción I, 4, 5 fracciones I y II, 41, 43, 44 fracción I y 46 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y los artículos 530, 548 y 550 del Código Procesal Civil para nuestra Entidad Federativa.

II. Del Debido Proceso. Previo a la cuestión de fondo en el presente asunto, es importante señalar por este Órgano Colegiado sobre el respeto y garantía a las prerrogativas de las partes en el procedimiento que ahora nos ocupa; motivo por el cual, resulta connotable señalar que la doctrina ha definido en términos generales al debido proceso como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; puesto que incluso de acuerdo a la jurisprudencia establecida por la corte interamericana de derechos humanos, la aplicación de las garantías del debido proceso no solo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; en este sentido, se ha señalado de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, que la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas que puedan ejercer

funciones del mismo tipo; es decir, que cuando la convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un Juez o Tribunal competente para la determinación de sus derechos, ésta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o Judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas.

Por la razón mencionada, cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, ello en los términos de la convención americana.

Bajo esta tesitura, en la substanciación de la presente apelación interpuesta en contra de la sentencia primaria de **veinticuatro de noviembre de dos mil veinte**, se respetaron las prerrogativas fundamentales de las partes relativas a la seguridad jurídica, legalidad y audiencia; lo que conlleva a sostener que en el presente juicio judicial existió el debido proceso, a efecto de no vulnerar precisamente garantía alguna de audiencia o legalidad; es decir, fue atendida la debida solicitud de la accionante acatando

todas y cada una de las reglas fijadas por la Ley
Adjetiva de la Materia del Estado de Morelos.

Robustecen los lineamientos
anteriores la siguiente jurisprudencia:

Novena Época
Registro: 169143
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta
XXVIII, Agosto de 2008,
Materia(s): Común
Tesis: I.7o.A. J/41
Página: 799

“AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se

observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.”

III. De la Resolución Impugnada:

Sentencia definitiva de fecha **veinticuatro de noviembre de dos mil veinte**, emitida por la **Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos**.

IV. Oportunidad del Recurso.-

Es pertinente analizar si el recurso interpuesto es el idóneo y oportuno; y esto es así en atención a que la parte actora, tuvo conocimiento del contenido de la resolución **de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte**, el día **veintisiete de noviembre del año en cita**, como se advierte de la notificación personal que se realizó en las instalaciones del juzgado

de origen, por conducto del abogado patrono¹; por lo que el plazo para interponer el recurso relativo comprendió los días **treinta de noviembre al cuatro de diciembre del año próximo pasado**, y en la especie el medio de impugnación se hizo valer el día **tres de diciembre de dos mil diecinueve**; por ello se considera que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora fue interpuesto dentro del plazo legal de cinco días, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 534 Fracción I² del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos.

V. Génesis del Juicio.- Previamente al análisis de los agravios propuestos por la parte recurrente, se estima conveniente, conocer la génesis de la contienda; lo que se logra mediante la relatoría siguiente:

1.- ***** en la vía Ordinaria Civil sobre Prescripción Positiva, demandó de *****, *****, *****y *****, **así como** *****, las siguientes prestaciones:

*“A).- La declaratoria judicial que ha operado en mi favor la prescripción adquisitiva (usucapión) sobre una fracción del inmueble ubicado en *****, actualmente con clave*

¹ Visible a foja 151 del expediente principal

² Artículo 534. PLAZO PARA INTERPONER APELACION. El plazo improrrogable para interponer el recurso de apelación será de: I. De cinco días si se trata de sentencia definitiva...

*****INSCRITA EN EL REGISTRO
 PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
 COMERCIO CON NUMERO DE REGISTRO
 *****SECCIÓN PRIMERA, fracción que
 cuenta con las siguientes medidas y
 colindancias:

AL *****con el mismo predio.

AL *****.

AL *****

Con una superficie total aproximada de

B) La cancelación de la inscripción que sobre
 dicho bien inmueble aparece en favor de
 *****, *****, *****, la inscripción a
 nombre del suscrito sobre la fracción del
 inmueble ubicado en ***** actualmente
 con clave catastral *****INSCRITA EN
 EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
 Y DEL COMERCIO aq, fracción que cuenta
 con las siguientes medidas y colindancias.-

AL *****con el mismo predio.

AL *****.

AL *****

Con una superficie total aproximada de

C) Como consecuencia de lo anterior se
 confirma la posesión real y material del
 inmueble mencionado a favor del suscrito.”

2. En consecuencia de lo anterior, se
 admitió la demanda en los términos precisados
 mediante auto de fecha doce de septiembre de
 dos mil diecinueve, ordenándose emplazar
 legalmente a *****, *****, *****y
 *****, **así como** *****, para que
 comparecieran a juicio en defensa de sus
 intereses, y otorgaran contestación a la
 demanda entablada en su contra.

3.- Por autos diversos de fechas doce
 de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la parte

demandada *****, dando contestación a la demanda entablada en su contra, asimismo, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrieron las demandadas *****, *****, *****, y *****, al no haber dado contestación a la demanda entablada en su contra, por lo que una vez entablada la litis se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de Conciliación y Depuración.

4. El día cinco de marzo de dos mil veinte, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de Conciliación y depuración, abriendo el juicio a prueba por el término común de ocho días; pruebas de la parte actora que fueron admitidas por auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, señalándose día y hora para su desahogo.

5. El día tres de noviembre del año próximo pasado, tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, desahogándose las pruebas ofertadas por la parte actora y que fueron debidamente admitidas por el juzgado de origen, por lo que una vez formulados los respectivos alegatos, se citó para oír sentencia, para lo cual el **veinticuatro de noviembre de dos ml veinte**, la Juez Natural emitió la resolución materia de

esta Alzada; en la que se declaró la improcedencia de la acción sobre prescripción positiva promovida por *****; pieza procesal que se constituye en el objeto del presente recurso de apelación, el que se resuelve al tenor siguiente:

VI. De la semántica de Agravios. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la lengua española define como agravio jurídico al: *“daño o perjuicio que el apelante expone ante el juez superior por habersele irrogado una norma y/o derecho por una sentencia inferior.”*

Bajo estas consideraciones, nuestra ley adjetiva de la materia establece en el artículo 537, lo siguiente:

“De los agravios. La expresión de agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución impugnada que el apelante considere le lesionen; los conceptos por los que a su juicio se hayan cometido; y las leyes, interpretación jurídica o principios generales de Derecho que estime han sido violados, o por inexacta aplicación o falta de aplicación.”

De la misma manera podrá ser motivo de agravio el que en la sentencia se haya omitido estudiar alguno de los puntos litigiosos o de los medios de prueba rendidos, o que la resolución no sea congruente con las pretensiones y las cuestiones debatidas en el juicio. También deberán expresarse agravios en relación con las que se consideren violaciones cometidas a las normas esenciales del procedimiento. Además, en el escrito de expresión de agravios, deberá indicarse si el apelante ofrecerá pruebas, y los puntos sobre los que versarán, con sujeción a lo que previene el artículo 549 de este Código...”

Finalmente, nuestro máximo Tribunal de Justicia Federal se ha manifestado al respecto refiriéndose al “Agravio” como: *precepto o preceptos legales violados o inexactamente aplicados, explicando en qué consiste tal violación o inexacta aplicación y cuál es la parte del fallo que lo causa.*

Ahora bien, es preciso, destacar que aun cuando no se advierte que exista disposición legal que imponga como obligación para este Tribunal que se transcriban los conceptos de violación, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en

las sentencias, sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del tribunal de alzada realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad que efectivamente se hayan hecho valer, por lo que se procede a transcribir los agravios expuestos por la parte actora que a la letra dicen:

“...AGRAVIOS

AGRAVIO PRIMERO.

Causa agravio la resolución recurrida en virtud de que en la misma se niega a conceder las prestaciones reclamadas, ya que en el considerando III resuelve.

*"de lo anterior se coligue que la acción de prescripción positiva hecha valer por la parte actora ***** es totalmente improcedente, pues al mismo no le está permitido prescribir la fracción del bien inmueble de la cual proindiviso es copropietario, con las personas ya mencionadas dentro del cuerpo de la presente resolución, pues existe impedimento expreso de la ley para ello, ya que no es posible prescribir, el bien sujeto u objeto de una copropiedad a la que pertenece la parte actora por lo tanto dicha acción es improcedente".*

*Dicha resolución causa agravio virtud de que el juzgador omite conceder el derecho de mi representado, ***** esto a pesar de que el mismo promueve no en SU carácter de copropietario, sino en su carácter de comprador.*

Lo anterior ya que el artículo 1250 del código civil establece que la prescripción puede correr contra cualquier persona, de la siguiente manera:

ARTICULO 1250.- LA PRESCRIPCIÓN COMIENZA CORRE CONTRA TODA PERSONA CASOS DE EXCEPCIÓN. *La prescripción puede comenzar y correr contra cualquier persona, salvo las siguientes excepciones en que la prescripción no puede comenzar ni correr:*

V.- Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común;

Asimismo en la fracción V, ya trascrita, menciona un caso de excepción, pero dicho caso de excepción es solamente respecto del bien común, es decir, respecto del bien sobre el cual se encuentran ejerciendo los mismos derechos. Un derecho de posesión común en donde todos los ejercen en su carácter de copropietario, y no con otro carácter.

Es decir cuando se promueve con un carácter de tercero es procedente el juicio de prescripción esto como lo establece el siguiente criterio:

Época: Décima Época

Registro: 2021494

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 74, Enero de 2020, Tomo III

Materia(s): Civil

Tesis: 1.80.C.83 C (10a.)

Página: 2630

PRESCRIPCIÓN NEGATIVA ENTRE COPROPIETARIOS. NO LA IMPIDE EL ARTÍCULO 1167, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO.

Dicho precepto establece que la prescripción no puede comenzar ni correr entre copropietarios o coposeedores respecto del bien común. Esta disposición, como lo revela su Propio texto, debe entenderse referida a la prescripción positiva o usucapión, puesto que la no posibilidad de prescripción la relaciona esa norma con la cosa que poseen varios, o de la que son copropietarios, y esto se corrobora atendiendo al contenido del artículo 1144 del mismo ordenamiento en cuanto dispone que si varias personas poseen en común una cosa no puede ninguna de ellas prescribir contra sus

copropietarios o coposeedores, pero si puede prescribir contra un extraño y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes. En efecto, la primera de esas reglas no es sino consecuencia del principio en el sentido de que el comunero posee tanto en nombre propio, por la parte que le puede corresponder de la cosa común, como en nombre de sus demás copropietarios o coposeedores y, por lo mismo, su posesión no reúne ni puede reunir los requisitos que la ley exige para que se verifique la prescripción adquisitiva, esto es, que sea exclusiva y en nombre propio; lo que no sucede en la otra hipótesis que menciona el precepto últimamente mencionado, toda vez que la posesión del coposeedor sí produce efecto contra un extraño y aprovecha a todos los partícipes para la prescripción positiva, dado que el coposeedor posee también en nombre de ellos, los actos posesorios que ejerce les aprovechan necesariamente, y para prescribir basta poseer por el término y bajo las condiciones de la ley, pudiendo una persona poseer por sí misma o por otra en su nombre. Por tanto, es inexacto que la norma analizada impida la prescripción negativa, toda vez que se refiere a la prescripción positiva.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 528/2019. Arteaga 823, A.C. 16 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez.

AGRAVIO SEGUNDO.

Causa agravio la resolución recurrida en virtud de que en la misma se niega a conceder las prestaciones reclamadas, ya que en el considerando III resuelve.

*"de lo anterior se coligue que la acción de prescripción positiva hecha valer por la parte actora ***** es totalmente improcedente, pues al mismo no le está permitido prescribir la fracción del bien inmueble de la cual proindiviso es copropietario, con las personas ya mencionadas dentro del cuerpo de la presente resolución, pues existe impedimento expreso de la ley para ello, ya que no es posible prescribir, el bien sujeto u*

objeto de una copropiedad a la que pertenece la parte actora por lo tanto dicha acción es improcedente"

*Dicha resolución causa agravio virtud de que el juzgador omite conceder el derecho de mi representado, ***** sin tomar encuentra que con el contrato que se anexo como documento base de la acción se terminó la copropiedad que existía entre las partes.*

*Lo anterior ya el documentos base de la acción estableció que las partes vendían su derecho de copropiedad a favor de ***** por lo cual con el mismo terminaba el derecho de copropiedad de los mismos.*

*Tal como se estableció en la cláusula "PRIMERA.- Libre de toda responsabilidad y de gravamen alguno, LAS VENDEDORAS, venden al C. ***** el predio descrito y deslindado anteriormente en la declaración 2, esto por cuanto a los derechos que las mismas tienen en calidad de copropietarias, siendo a partir de la firma del presente contrato el único y exclusivo propietario EL COMPRADOR, DISOLVIÉNDOSE Así LA COPROPIEDAD QUE GUARDABA CON LAS MISMAS".*

AGRAVIO TERCERO.

Causa agravio la resolución recurrida en virtud de que en la misma se niega a conceder las prestaciones reclamadas, ya que en el considerando III resuelve.

*"de lo anterior se coligue que la acción de prescripción positiva hecha valer por la parte actora ***** es totalmente improcedente, pues al mismo no le está permitido prescribir la fracción del bien Inmueble de la cual proindiviso es copropietario, con las personas ya mencionadas dentro del cuerpo de la presente resolución, pues existe impedimento expreso de la ley para ello, ya que no es posible prescribir, el bien sujeto u objeto de una copropiedad a la que pertenece la parte actora por lo tanto dicha acción es improcedente".*

*Dicha resolución causa agravio virtud de que el juzgador omite conceder el derecho de mí representado, ***** sin tomar en cuenta que existen presunciones en contra de la copropiedad que la ley establece.*

Ya que el artículo 1088, establece circunstancias contrarias a la copropiedad las cuales se debieron tomar en cuenta, dichas circunstancias son las siguientes:

ARTÍCULO 1088.- SUPUESTOS CONTRARIOS A LA COPROPIEDAD. Hay signo contrario a la copropiedad.

I.- cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared divisoria de los edificios;

II.- Cuando visiblemente toda la pared, vallado, cerca o seto estén contruidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre una y otra de las dos contiguas;

III.- Cuando la pared soporte las cargas y carreras, pasos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua;

IV.- Cuando la pared divisoria entre patios, jardines, y otras heredades esté contruida de modo que la albardilla caiga hacia una sola de las propiedades;

V.- Cuando la pared divisoria contruida de mampostería presente piedras llamadas pasaderas, que de distancia en distancia salen fuera de la superficie sólo por un lado de la pared, y no por el otro;

VI.- Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forme parte, y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio;

VII.- Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallados, cercas o setos vivos y las contiguas no lo estén;

VIII.- Cuando la cerca que encierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera;

IX.- Cuando la tierra o broza sacada de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla, se halla sólo de un lado; en este caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente del dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior. La presunción que establece esta fracción cesa cuando la inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado; y

X.- En general, se presume que en los casos señalados en las fracciones anteriores, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor estos signos exteriores.

Como se desprende del artículo transcrito y sus fracciones existen presunciones contrarias a la copropiedad su señoría debió valorar en sentencia definitiva dichas circunstancias, ya que aunque exista un documento de copropiedad, si existen signo que presuman lo contrario debe establecerse que se han dividido físicamente el bien y por lo tanto ya ejercen sus derechos de posesión de forma independiente.

Debiendo este juzgado haber valorado además el documento base de la acción como una presunción humana de la terminación de la copropiedad.

Además haber entrado al estudio de la inspección realizada en autos donde se inspecciono el bien materia de la prescripción y resulto que el mismo cuenta con su propio límite territorial, muros columnas ventanas, así como entrada independiente al resto del inmueble.

VII. Estudio de los Agravios.- Ahora

bien, se procede al estudio de la apelación interpuesta por la parte actora ***** advirtiéndose del pliego de inconformidad que se trata de tres agravios; para lo cual este órgano resolutor y dado que no se encuentra obligado a estudiar los concepto de violación de manera individual o por el orden de su exposición, sino únicamente que no se cambien los hechos y que se aborden en su totalidad las inconformidades del quejoso; por lo que se procederá en conjunto al estudio de los agravios; apoya lo anterior el siguiente criterio Jurisprudencial, cuyo rubro y texto es el siguiente:

Toca Civil: 133/2020-5
Expediente: 354/2019-2
Recurso: Apelación
Ordinario Civil.
Magistrada Ponente: Elda Flores León.

Época: Décima Época
Registro: 2011406
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 29, Abril de 2016, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.)
Página: 2018

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo directo 539/2015 (cuaderno auxiliar 831/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Petróleos Mexicanos y otro. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián

Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 624/2015 (cuaderno auxiliar 861/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 640/2015 (cuaderno auxiliar 870/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Efrén de Dios López. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo directo 605/2015 (cuaderno auxiliar 858/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. José Enrique León Díaz. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Amparo en revisión 308/2015 (cuaderno auxiliar 1021/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 13 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de abril de 2016 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Bajo ese contexto, este órgano tripartito, procede al estudio de los agravios y en relación al **primer agravio**, el apelante se duele:

a) Que la A quo omite conceder el derecho a ***** en virtud de que promovió en su carácter de comprador y no de copropietario.

b) Que la A quo no aplicó correctamente el artículo 1250 fracción V del Código Civil vigente, ya que es un caso de excepción, que solamente no prescribe solo el bien común, que cuando se promueve en un carácter de tercero es procedente el juicio.

En relación al **segundo agravio**, el apelante lo cimienta en lo siguiente:

Que le causa agravio la sentencia recurrida, en virtud que le niegan sus prestaciones, sin que la A quo haya tomado en cuenta el contrato base de la acción, del cual se advierte que terminó la copropiedad entre las partes.

Finalmente, en relación al **tercer agravio**, el apelante lo basa en lo siguiente:

a) Que la A quo omite conceder el derecho a ***** sin tomar en cuenta que existen presunciones en contra de la copropiedad y que la A quo debió valorarlos en la sentencia recurrida circunstancias que aunque exista un documento de copropiedad existen signos que presumen lo contrario. Que debió estudiar la inspección judicial y advertir que dicho inmueble cuenta con propio limite territorial, muros columnas, ventanas así como entrada independiente del resto del inmueble.

Los agravios que se analizan devienen notoriamente **infundados**, estimando por ello oportuno, la cita de los siguientes ordinales, para una mejor comprensión de los disensos que se atienden:

“ARTICULO 1075.- NOCION DE COPROPIEDAD. Hay copropiedad cuando un bien, un derecho o una universalidad de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero, pertenecen pro indiviso a dos o más personas

“ARTICULO 1250.- LA PRESCRIPCION COMIENZA Y CORRE CONTRA TODA PERSONA Y CASOS DE EXCEPCION. La prescripción puede comenzar y correr contra cualquier persona, salvo las

siguientes excepciones en que la prescripción no puede comenzar ni correr: I.- Contra los incapacitados, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de éstos no se hubiere interrumpido la prescripción; II.- Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto de los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley; III.- Entre los consortes; IV.- Entre los incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure la tutela; **V.- Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común;** VI.- Contra los ausentes del Estado de Morelos que se encuentren en servicio público; y VII.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro del Estado de Morelos.

Ahora bien, los argumentos del recurrente carecen de todo contexto jurídico al referir en esencia *que la Juez natural omite conceder el derecho al actor no obstante que promovió en su carácter de comprador y no de copropietario; que cuando se promueve con el carácter de tercero es procedente el juicio de prescripción, que la Juzgadora inferior en grado, no tomó en cuenta el documento base de la acción en el cual las demandadas vendían su derecho de copropiedad al ahora actor.*

En primer lugar, debemos partir que atendiendo al precepto legal citado en líneas que antecede, existe copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a

varias personas, de lo que se colige que los copropietarios tienen el dominio sobre la totalidad de la cosa, en la medida que les corresponde, y no sobre una superficie determinada.

Ahora bien, asentado lo anterior es oportuno citar lo que establece el artículo 661 del Código Procesal Civil en vigor, el cual estatuye que el juicio de prescripción positiva se promoverá en contra de quien aparezca como propietario del bien inmueble que se pretenda adquirir por prescripción en el Registro Público de la Propiedad.

De igual forma el artículo 1250 de la ley Sustantiva Civil en vigor, establece los casos de excepción de las personas entre las cuales no corre el término de la prescripción, citando entre otras **entre copropietarios o poseedores, respecto del bien común.**

En el caso ha estudio, como se puede advertir de la correcta valoración que hiciera la Juez primigenia, respecto de la documental pública relativa al certificado de libertad de gravamen de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado

de Morelos, mismo que fue exhibido por la parte actora, el bien inmueble que se pretende prescribir se encuentra en copropiedad, es decir, se puede advertir como copropietarios al actor ***** así como a las demandadas *****, *****, *****y *****.

De los artículos 1223 y 1224 del Código Civil del Estado de Morelos, se advierten las dos clases de prescripción: 1) Positiva, denominada actualmente usucapión, que es el medio para adquirir la propiedad y demás derechos reales sobre bienes, mediante la posesión y, 2) Negativa, que es una forma de liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo, por no exigirse su cumplimiento. Atendiendo a los preceptos legales antes citados la prescripción no se actualiza respecto del bien común entre copropietarios, en atención a la naturaleza de la copropiedad que consiste en que un bien o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas, todas poseedoras del bien en tanto no se haga la división, en el caso ha estudio si bien es cierto como lo refiere el apelante que dicho inmueble se encuentra dividido es decir que la fracción que refiere se encuentra en posesión se encuentra dividido de la fracción que pretende usucapir, tal como se advierte de la inspección judicial que realizara la actuaria

adscrita al juzgado de origen³, sin embargo, se trata de una división de hecho y no derecho, dado que como se reitera en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos, aún se encuentran como copropietarios el actor y las demandadas; por lo que mientras no suceda la división de la cosa en común, la usucapión no puede correr entre copropietarios.

No debemos perder de vista que para la debida integración de la relación jurídica procesal en un controvertido de tal naturaleza, se debe demandar a todos los copropietarios, apareciendo como copropietarios el propio actor ******* y las demandadas *******, *********, *******y *******, de lo que podemos concluir válidamente, que no sería jurídicamente posible la integración de una relación jurídica procesal, el apelante no puede ser parte actora y demandado a la vez, en virtud que mientras no exista una disolución de la copropiedad y división legal de dicho inmueble, la prescripción no puede operar en contra de los copropietarios.

Ahora bien, el disconforme se duele que *la Juez primigenia no tomó en cuenta que el*

³ Visible a foja 120 del expediente principal.

actor promovió en su carácter de comprador y no de copropietario, en efecto, el recurrente refiere que adquirió por medio de contrato de compraventa de fecha tres de marzo de dos mil catorce, el bien inmueble el cual pretende usucapir, para lo cual exhibió dicho contrato, sin embargo, dicha documental, no le otorga el derecho de demandar la prescripción del bien inmueble que pretende usucapir, en virtud que como ha quedado asentado en líneas que anteceden el bien inmueble se encuentra en copropiedad, sin que a la fecha se haya dado la división del mismo, apareciendo en el instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, como copropietarios el actor y las demandadas. Bajo ese contexto aun cuando el apelante refiere que compareció a juicio en su carácter de comprador, sigue teniendo la calidad de copropietario del bien inmueble que pretende usucapir.

*No pasa desapercibido para este tribunal de alzada, lo que argumenta el apelante al referir que *la excepción a la prescripción en relación a copropietarios solo es respecto del bien común, pero que cuando se promueve en carácter de tercero es procedente el juicio de prescripción.**

Lo argumentado por el disconforme, carece de sustento legal, en primer lugar, el actor no tiene el carácter de tercero extraño, como lo argumenta el apelante; como se ha reiterado a lo largo del presente fallo, el actor sigue teniendo el carácter de copropietarios, respecto al bien inmueble motivo de la prescripción que solicita, ya que mientras dure el estado de indivisión no puede correr prescripción entre ellos, en efecto la tesis aislada que cita el disconforme con número de registro 2021494, de la Décima época, del libro 74, enero 2020, tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, establece entre otras cosas, si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores; pero sí puede prescribir contra un extraño.

La cita de dicha tesis en nada favorece a los intereses del apelante dado que como se reitera el actor no tiene la calidad de tercero extraño, en virtud que quedó acreditada la copropiedad existente entre el actor y las demandadas.

Ahora bien, el hecho de que los copropietarios demandados no poseyeran el

inmueble motivo de la prescripción, y únicamente se encuentre en posesión el actor tal como lo argumenta, no podrá correr la prescripción a su favor y en contra de los demás condueños, existe disposición expresa en nuestra legislación civil sustantiva, que entre copropietarios no opera la prescripción; y en el caso que nos ocupa existe copropiedad entre el actor y las demandadas, en virtud que no existe división de la cosa común.

Finalmente en relación a lo que argumenta el apelante, *que la Juez natural no tomó en cuenta las presunciones en contra de la propiedad, previstas por el artículo 1088 del Código Civil en vigor.*

En efecto se trata de presunciones, signos que en nada favorece a los intereses del actor, para acreditar que no existe copropiedad, y para este tribunal de alzada la juzgadora de origen no debió tomar en cuenta, siendo innecesario, dado que existe prueba plena respecto de la copropiedad existente entre el actor y las demandadas; tal como quedó acreditado con la documental relativa al certificado de libertad o gravamen expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del estado de Morelos.

De lo anterior se concluye a juicio de este órgano tripartito, que la resolución combatida y emitida por la A quo, atendió correctamente las pretensiones y excepciones, sometidas a su jurisdicción por las razones expuestas en el desarrollo del presente fallo.

De todo ello, este Tribunal arriba a concluir que de conformidad con las manifestaciones vertidas en el cuerpo de esta resolución, resulta procedente **CONFIRMAR** la sentencia definitiva de fecha **veinticuatro de noviembre de dos mil veinte**, dictada por la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, dentro del juicio **Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva** promovido por ***** contra *****, *****, *****y ***** **así como** *****; en el expediente número **354/2019-2**.

VIII. Con fundamento en la fracción IV del artículo 159 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, el cual establece:

“Condena en costas procesales. La condenación en costas se hará cuando así lo

prevenga la Ley, o cuando a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados:

I.- ...;

II.- ...;

III.- ...;

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutive, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias;

V.- ...; y,

VI.- ...”

Todo ello con independencia de la sanción correspondiente que dicte prudencialmente el Tribunal”.

Bajo este tenor, es connotable precisar que en relación con la condenación de costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues independientemente de la mala fe o la temeridad, será condenada en las costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad.

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al Órgano Jurisdiccional, es decir, el apelante. Por ende, la expresión "**conformes de toda conformidad**", debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutive, a su esencial sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con independencia de como se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé a los resolutivos.

En consecuencia de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 159 fracción IV de la Codificación de mérito, se condena al apelante ********* al pago de las costas procesales, en esta instancia.

Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio puntualizado por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice:

*Octava Época
Registro: 222482
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

Tesis Aislada

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 VII, Junio de 1991*

Materia(s): Civil

Tesis:

Página: 244

**COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. SU
 CONDENA SE RIGE POR LA PARTE
 RESOLUTIVA. (LEGISLACION DEL
 ESTADO DE JALISCO).**

El artículo 142, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, dispone, en lo conducente, que siempre será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive; disposición de la cual se desprende que para determinar la procedencia o improcedencia de la condena en costas, debe atenderse a la parte resolutive del o de los fallos y no a su parte considerativa; por tanto, no importa la forma en que los agravios esgrimidos sean calificados en segunda instancia, ya que lo que interesa para condenar en costas es que la parte perdedora haya sido condenada por dos sentencias enteramente conformes en su parte resolutive y esta interpretación es así ya que el numeral 143 del mismo Código adjetivo establece las excepciones a la obligación de pagar costas, y en ninguna de las hipótesis contemplan la excepción de la obligación de pagar costas en los casos en que se hubieren declarado fundados, aunque a la postre inoperantes, los agravios.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
 MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.**

Amparo directo 937/90. Ana María Avila Loza. 18 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Federico Rodríguez Celis.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 96 fracción IV, 101, 105, 106, 107, 504, 505, 506,

del Código Procesal Civil del Estado, es de resolverse y se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se **CONFIRMA** en todas y cada una de sus partes la resolución de fecha *veinticuatro de noviembre de dos mil veinte*, motivo de la apelación.

SEGUNDO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 159 fracción IV de la Ley Adjetiva Civil en vigor, se condena a ********* al pago de las costas procesales, en esta instancia.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-

Devuélvanse los autos con testimonio de este fallo al Juzgado de origen, y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.

A S Í, por unanimidad lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala del Segundo Circuito del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos Magistrada **ELDA FLORES LEÓN**, Presidente y Ponente en el presente asunto, Magistrada **MARÍA DEL CARMEN AQUINO CELIS** Integrante quien por acuerdo de pleno extraordinario de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, quien cubre ponencia

Toca Civil: 133/2020-5
Expediente: 354/2019-2
Recurso: Apelación
Ordinario Civil.
Magistrada Ponente: Elda Flores León.

número trece y Magistrada **LETICIA TABOADA SALGADO**, Integrante, Integrantes, quienes actúan ante el Secretario de Acuerdos Civiles Licenciado **David Vargas González**, quien da fe.

Las firmas que calzan la presente resolución corresponden al Toca Civil 133/2020-5, expediente número 354/2019 EFL/sbc/jvsm.